

**Informe Secretarial.** 17 de mayo de 2023. Pasa al Despacho el proceso Ejecutivo Laboral 2023-0194, la secretaría informa que se encuentra pendiente por resolver la admisión del presente proceso ejecutivo laboral. Sírvase proveer.

SERGIO EDUARDO SÂNCHEZ MARTÍN

Secretario

JUZGADO CUARENTA Y CUATRO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. Ejecutivo Laboral No. 11001 31 05 044 2023 00194 00

Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2023.

El Despacho pasa a estudiar si la solicitud de ejecución presentada por la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** contra **CRC LUMEDICA SAS**, reúne los requisitos señalados por los artículos 100 del CPTSS y 422 del CGP.

Así las cosas, el artículo 100 del CPTSS, establece:

"Art. 100. Procedimiento de la ejecución. Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme. (...)"

Al paso que el artículo 422 del CGP, establece que las obligaciones ejecutables requieren de demostración documental en la cual se advierta la satisfacción de las condiciones tanto formales como de fondo, establecidas por el legislador.

República de Colombia

a. Las formales exigen que se trate de documento o documentos auténticos,

que conformen unidad jurídica; que emanen de actos o contratos del deudor

o de su causante (títulos contractuales), o de una sentencia de condena

proferida por el juez (títulos judiciales).

b. Las de fondo atañen a que en esos documentos aparezca a favor del

ejecutante y a cargo del ejecutado una obligación clara, expresa y exigible

y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de

pagar una suma de dinero.

Así pues, para impetrar la acción ejecutiva es necesario que exista un título

ejecutivo, que es el instrumento por medio del cual se busca hacer efectiva una

obligación sobre cuya existencia no hay duda alguna.

Adicional a ello, como quiera que lo pretendido es la ejecución del cobro de aportes

a pensión, resulta necesario precisar lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100

de 1993 el cual dispone:

Art 24.- Acciones de cobro. Corresponde a las entidades administradoras de

los diferentes regimenes adelantar las acciones de cobro con motivo del

incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la

reglamentación que expida el Gobierno Nacional. <u>Para tal efecto, la liquidación</u>

mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará

mérito ejecutivo. (Subrayas fuera de texto).

A fin de reglamentar dicha norma, el artículo 2.2.3.3.3. del Decreto 1833 de 2016,

por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones -entre

ellas los Decretos 656 y 1161 de 1994-, dispuso que la obligación de los fondos

pensionales de iniciar sus acciones de cobro debe ser dentro de los tres meses

siguientes al incumplimiento por parte del empleador, así:

Ejecutivo 11001 31 05 044 2023 00194 00 Porvenir S.A. Vs CRC LUMEDICA SAS

Rama Judicial Juzgado Cuarenta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá

República de Colombia

ARTÍCULO 2.2.3.3.3. ACCIONES DE COBRO. Corresponde a las entidades

administradoras de los diferentes regimenes entablar contra los empleadores

las acciones de cobro de las cotizaciones que se encuentren en mora, así como

de los intereses de mora a que haya lugar, pudiendo repetir contra los

respectivos empleadores por los costos que haya demandado el trámite

pertinente, en los términos señalados en el literal h) del artículo 14 del Decreto

número 656 de 1994.

Estas acciones deberán iniciarse de manera extrajudicial a más

tardar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la cual se

entró en mora. Lo anterior es aplicable inclusive a las administradoras del

régimen de prima media con prestación definida, las cuales podrán iniciar los

correspondientes procesos coactivos para hacer efectivos sus créditos de

conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso

Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992 y demás normas que los

adicionen o reformen. (Lo resaltado fuera del texto)

Por su parte, el artículo 2.2.3.3.5. del Decreto 1833 de 2016, establece que una vez

vencidos los plazos para que los empleadores realicen las consignaciones, las

administradoras a través de comunicación dirigida al deudor moroso, lo requerirá

para que cancele y, si transcurridos 15 días siguientes a dicho requerimiento, el

empleador no se ha pronunciado, se elaborará la liquidación que presta mérito

ejecutivo.

A su vez, el artículo 2.2.3.3.8. del mencionado Decreto dispone que, vencido el

anterior término, debe requerirse en mora al posible ejecutado una vez se venza el

plazo señalado para efectuar el pago de las cotizaciones respectivas, y le concede

quince días a fin de que se pronuncie sobre los montos adeudados; advierte la

República de Colombia

norma que si el empleador guarda silencio, la administradora pensional deberá

elaborar la liquidación que presta mérito ejecutivo:

Artículo 2.2.3.3.8. - Del cobro por vía ordinaria. En desarrollo del artículo 24

de la Ley 100 de 1993, las demás entidades administradoras del régimen

solidario de prima media con prestación definida del sector privado y del

régimen de ahorro individual con solidaridad adelantarán su correspondiente

acción de cobro ante la jurisdicción ordinaria, informando a la

Superintendencia Bancaria con la periodicidad que esta disponga, con

carácter general, sobre los empleadores morosos en la consignación oportuna

de los aportes, así como la estimación de sus cuantías e interés moratorio,

con sujeción a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y demás

disposiciones concordantes.

Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas

por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante

comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá. Si dentro de los

quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha

pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito

ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de

1993.

De otra parte, se tiene que la Ley 1607 de 2012 en su artículo 178, facultó a las

Administradoras del Sistema de la Protección Social a realizar acciones de cobro

ante la mora en el pago de los aportes de sus afiliados; por tal razón la Unidad

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

Protección Social ha fijado unos estándares que deben cumplir las administradoras

públicas y privadas de la protección social, en las acciones de seguimiento y cobro

a los aportantes morosos; estándares que en principio se rigieron por la Resolución

No. 444 del 28 de junio de 2013, la cual fue subrogada a partir del 01 de julio de

República de Colombia

2017 por la Resolución 2082 de 2016, normatividad esta última que se encontraba vigente para la calenda de los aportes que se pretenden cobrar por la vía ejecutiva.

Al respecto, la mencionada disposición consagra en sus artículos 11 al 13 ibidem,

prevén los estándares que deben cumplir las Administradoras del Sistema de

Seguridad Social en aras de efectuar las acciones de cobro, de la siguiente manera:

Artículo 11. CONSTITUCIÓN TÍTULO EJECUTIVO. La Unidad verificará que las

administradoras privadas hayan expedido en un plazo máximo de cuatro (4)

meses contados a partir de la fecha límite de pago, la liquidación que preste

mérito ejecutivo sin perjuicio de lo dispuesto en las normas legales aplicables

al respectivo subsistema. Y para las administradoras públicas, el plazo

máximo para expedir el acto administrativo que preste mérito ejecutivo, es de

seis (6) meses.

ARTÍCULO 12. ACCIONES PERSUASIVAS. Una vez las Administradoras

constituyan el título que presta mérito ejecutivo, deben contactar al deudor

como mínimo dos veces. El primer contacto lo deben realizar dentro de los

quince (15) días calendario siguientes a la constitución 1 firmeza del título

ejecutivo, según el caso, y el segundo, dentro de los treinta (30) días

calendario siguientes a la fecha en que se realizó el primer contacto, sin

superar cuarenta y cinco (45) días calendario, de conformidad con los criterios

que se definen en el Anexo Técnico Capítulo 3.

ARTÍCULO 13. ACCIONES JURÍDICAS. Vencido el plazo anterior las

administradoras contarán con un plazo máximo de cinco (5) meses para dar

inicio a las acciones de cobro coactivo o judicial, según el caso.

En conclusión y analizando todas las normas en conjunto se tiene que para que la

solicitud de ejecución sea procedente el Fondo Pensional debe iniciar las acciones

República de Colombia

dentro de los 3 meses siguientes al incumplimiento, para la cual deben remitir comunicación al moroso requiriendo el pago; y si a los 15 días no se recibe respuesta se procederá a elaborar la liquidación que presta mérito ejecutivo, misma que a su vez debe ser elaborada dentro de los 4 meses siguientes a la entrada en

mora.

Ahora una vez realizada la liquidación en cumplimiento de los anteriores términos, se deberán iniciar las acciones persuasivas las cuales consisten en dos requerimientos, el primero a los 15 días de la elaboración de la liquidación y el otro a los 30 días sin exceder los 45 y vencido este término se contará con 5 meses para

iniciar las acciones judiciales de cobro.

Sintetizado lo anterior, procede el despacho a resolver la solicitud para lo cual se

tiene que la parte demandante aportó:

 Título ejecutivo denominado "Liquidación de aportes pensionales períodos adeudados" señala que la CRC LUMEDICA SAS adeuda por concepto de

aportes e intereses de los periodos comprendidos entre septiembre de 2018

hasta agosto de 2022 la suma de \$56.921.136 (f.°11- 15 archivo 01).

- Comunicación dirigida al representante legal de **CRC LUMEDICA SAS.** del

10 de noviembre de 2022, notifica del incumplimiento por mora en el pago

de aportes entre los periodos agosto de 2017 hasta agosto de 2022 por valor

de \$32.764.936 (f° 16-17 archivo 01).

Detalle de deuda (fl 19).

- Constancia de envío de la comunicación expedida por la empresa 4-72 (fls.

20-21).

República de Colombia

Teniendo en cuenta lo anterior, el título ejecutivo corresponde a la liquidación elaborada por Porvenir S.A., en la que se determina el valor adeudado por el ejecutado que se encuentra en mora de trasladar los aportes pensionales de sus trabajadores, tal como lo prevé el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

No obstante, la solicitud de ejecución no cumple con los requisitos antes enunciados por cuanto:

- 1. El título ejecutivo y el requerimiento realizado a la sociedad ejecutada no coinciden en los valores indicados, como quiera que en el requerimiento solo se precisa el cobro de capital y no intereses de mora, tal como se indicó en el título ejecutivo y en la solicitud de ejecución.
- 2. Además de lo ya expuesto, no se puede pasar por alto que en la demanda y en el requerimiento se señala que los periodos a cobrar corresponden a los meses de agosto de 2017 hasta agosto 2022; mientras que en la liquidación de aportes pensionales, al igual que en el detalle de deuda se indica que dichos ciclos corresponden al periodo comprendido entre septiembre de 2018 hasta agosto de 2022, de manera que no es posible determinar sobre periodos recae la mora, lo que conduce a que la obligaciones no sea clara-.
- 3. El requerimiento que "presuntamente" fue remitido a la sociedad ejecutada, mediante correo electrónico del 10 de noviembre de 2022; se acredita con una certificación de comunicación electrónica o "email certificado" expedido por la empresa 4-72, de la cual no es posible **constatar** qué documentos fueron adjuntados a ese mensaje de datos; en tanto y en cuanto, si bien se observa el nombre de los archivos adjuntos, no menos cierto es, que no existe herramienta, marca o señal de cotejo de la empresa de correo postal que expidió el "certificado de comunicación electrónica", con el que se pudiese

República de Colombia

corroborar el contenido de la misiva de requerimiento de pago y el "detalle de

deuda" supuestamente remitidos a la parte pasiva.

En ese orden de ideas, al no cumplir el requerimiento con el cual se pretendía

constituir en mora al empleador, la finalidad señalada en la norma atrás

referenciada, que no es otra que el destinatario conozca del mismo, así como

de los anexos correspondientes; para que como consecuencia de ello se

pronuncie o se quede callado dentro del plazo fijado en el decreto en mención;

el Despacho no puede determinar la fecha para iniciar a contabilizar el plazo

de 15 días, lo cual afecta el requisito de exigibilidad que debe cumplir el

documento para ser considerado título ejecutivo.

4. El fondo pensional pretende ejecutar la mora de las cotizaciones del periodo

comprendido desde agosto de 2017 ora desde septiembre de 2018, sin que

se conozca con exactitud cuales son los periodos sobre los cuales se predica

la mora, por ello, de acuerdo con el artículo 13 del Decreto 1161 de 1994,

contaba con un plazo máximo de tres meses para realizar sus gestiones de

cobro, pero solo lo hizo hasta el mes de noviembre de 2022, esto es, pasados

más de los 3 meses desde la mora del empleador.

En este punto, importa traer a colación la STL3387-2020, Radicación no

58574 del 18 de marzo de 2020, en la que la Corte Suprema de Justicia,

trajo a colación precisamente el artículo 13 del Decreto 1161 de 1994, en

cuanto regula lo concerniente a las acciones de cobro a favor de las

entidades administradoras de los diferentes regimenes.

De otro lado, no desconoce el Despacho la expedición de las Resoluciones

regulatorias del trámite de cobro por parte de la UGPP, no obstante, ellas no son

aplicables al caso en tanto no se satisface el presupuesto primigenio de cobro

oportuno por lo que la acción ejecutiva no puede tener vía; y en consecuencia la

Ejecutivo 11001 31 05 044 2023 00194 00 Porvenir S.A. Vs CRC LUMEDICA SAS

Rama Judicial Juzgado Cuarenta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá

República de Colombia

parte actora deberá acudir al proceso ordinario a efecto de lograr la declaración de

la deuda.

Precisando que el incumplimiento de los términos indicados, de manera alguna se

traduce en un concepto a priori de caducidad o prescripción, puesto que lo que

conlleva el no requerir en tiempo al empleador por los aportes en mora, es a que

no se constituya el título ejecutivo debidamente, lo que implica que no pueda

adelantar su cobro por vía ejecutiva, sino por la vía ordinaria.

En gracia de discusión, y si el inicio de las acciones de cobro hubiera sido efectuada

en término, se tiene que conforme lo precisa la Resolución 2082 de 2016, una vez

vencida la fecha límite de pago de la obligación por el empleador, la AFP contaba

con un término perentorio de 4 meses para realizar la respectiva liquidación que

prestase mérito ejecutivo, por lo que, si lo pretendido es el pago de aportes de **agosto** 

de 2017 ora desde septiembre de 2018, se tiene que la fecha límite para realizar

la liquidación era en enero de 2017 o febrero de 2019, no obstante, como ya se dijo,

únicamente se hizo hasta el 10 de noviembre de 2022.

Finalmente, importa precisar que si bien en el escrito demandatorio se señala que

se está en presencia de una cartera de dificil recuperación; ante el riesgo de

incobrabilidad, razón por la cual se omitieron las acciones persuasivas previstas

en la Resolución 2082 de 2016; es de anotar que tal presupuesto no se encuentra

probado en el expediente en los términos de la norma en cita; en tanto que el

plenario adolece de la manifestación expresa que en ese sentido elevara el

aportante, situación que no es posible derivar per se de la mora en que incurrió

aquel; aunado a que el fondo ejecutante tampoco acreditó las demás situaciones

contenidas en capitulo III numeral 3 de la Resolución 2082.

Por lo anteriormente descrito, no se encuentra dentro del presente asunto que se

haya cumplido en su totalidad los parámetros que establece el artículo 100 del

República de Colombia

C.P.T.S.S., en concordancia con el artículo 422 del C.G.P., así como con lo dispuesto en los artículos 22 a 24 de la ley 100 de 1993, el art. 5° del Decreto reglamentario 2633 de 1994, el Decreto 1833 de 2016, ni la Resolución 2082 de 2016, pues se insiste que con la documental allegada no es posible inferir que la ejecutada i) haya tenido pleno conocimiento de los montos adeudados al igual que los anexos remitidos, ii) que contó con el término para resarcir la obligación o presentar manifestación alguna sobre esta, iii) no existe correlación entre la información reportada en el título ejecutivo vs requerimiento en mora, por lo que, la ausencia de alguno de los requisitos analizados permite colegir que no se integró en debida forma el título ejecutivo, aunado a que iv) el fondo pensional no realizó sus gestiones de cobro dentro de los plazos previstos en el artículo 13 del Decreto 1161 de 1994, razón por la cual se dispondrá negar el mandamiento de pago solicitado por la parte ejecutante.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO CUARENTA Y CUATRO LABORAL DEL** CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.,

**RESUELVE** 

**PRIMERO: RECONOCER** personería a la abogada **LAURA MARCELA RAMIREZ ROJAS,** identificado con c.c. 53.905.165 y TP. 201.530 del C.S. de la J., para que actúe como apoderada de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.

**SEGUNDO: NEGAR** el mandamiento de pago, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**TERCERO: ORDENAR DEVOLVER** la demanda y sus anexos a la parte actora, previas las desanotaciones en los libros correspondientes.



**CUARTO: ORDENAR** que por secretaría se realice la notificación por estado electrónico, estado que deberá ser publicado en la página de la Rama Judicial <a href="https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-044-laboral-del-circuito-de-bogota-bogota/77">https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-044-laboral-del-circuito-de-bogota-bogota/77</a>

Notifiquese y cúmplase,

La Juez,

ANA MARÍA SALAZAR SOSA

Notificado por estado No. 033 del 26 de septiembre de 2023. Fijar virtualmente

Firmado Por:

Ana Maria Salazar Sosa

Juez

Juzgado De Circuito

Laboral 044

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 9f3a660731a2f15be8b878917a988b574e04913336768fa65bbe5df049296329

Documento generado en 25/09/2023 10:39:01 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica